

DECLARACIÓN PÚBLICA

La Unión Europea no debe volver la espalda a Angola

Amnistía Internacional ha expresado hoy su gran temor a que el fracaso del proceso de paz y la retirada de las zonas de guerra de los trabajadores de las organizaciones de ayuda humanitaria y de los encargados de mantener la paz pueda provocar un recrudecimiento de los abusos contra los derechos humanos en Angola.

La organización de derechos humanos ha instado, por tanto, al Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, y concretamente a su actual presidente, Joshka Fischer, a que se preste plena atención a la situación actual de Angola en la próxima reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de todos los países de la Unión Europea, que se celebrará en febrero.

Amnistía Internacional ha pedido a este influyente organismo de la Unión Europea que ejerza todo su poder para garantizar que se protege a la población civil angoleña mientras se hacen nuevos intentos para poner fin a la guerra. Esta es una tarea vital para toda la región, ya que la guerra de Angola está vinculada a otros conflictos de los países vecinos.

«Mientras se reanudan los esfuerzos para poner fin al conflicto de Angola, la Unión Europea debe utilizar su influencia internacional para garantizar que en todas las discusiones se tienen en cuenta las cuestiones de derechos humanos y que todo acuerdo de paz contenga disposiciones encaminadas a proteger de forma efectiva e imparcial estos derechos», ha declarado Amnistía Internacional.

«Si estos mecanismos se hubieran establecido en los anteriores acuerdos de paz de Angola, en 1991 y 1994, podría haberse evitado gran parte del sufrimiento y la desconfianza. Esta vez, la comunidad internacional no debe seguir siendo un testigo silencioso de los masivos abusos contra los derechos humanos, como los crímenes de guerra.»

En concreto, la Unión Europea debe presionar para que continúe en Angola la presencia de trabajadores de derechos humanos de la ONU y para que éstos reciban el apoyo político y económico necesario para actuar con eficacia. Asimismo, la Unión Europea debe instar a las partes del conflicto a que faciliten el acceso a las zonas que controlan y ofrezcan todas las garantías necesarias para la seguridad y la libertad del personal de la ONU.

Amnistía Internacional está convencida de que la continuidad de la observación y la protección de los derechos humanos son fundamentales para alcanzar una paz duradera. No puede haber paz si las partes implicadas en el conflicto no muestran respeto al derecho a la vida y a la integridad física de las personas, en aplicación de las leyes humanitarias y de derechos humanos reconocidas internacionalmente.

En una declaración de su presidencia realizada el pasado 21 de enero, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió una presencia multidisciplinar de la ONU, dependiente del Representante Especial del Secretario General, para proseguir las negociaciones políticas. Los informes indican que el gobierno angoleño pretende rechazar esta propuesta, lo que haría peligrar más la continuidad de la presencia de los trabajadores de derechos humanos de la ONU.

Como parte de diversos tratados de derechos humanos internacionales y regionales, Angola se ha comprometido a respetar estos derechos. Por tanto, su gobierno debe acoger la oportunidad de continuar cooperando con los funcionarios de derechos humanos de la ONU, y la Unión Europea debe alentarlos para que así lo haga.

Información general

El proceso de paz de Angola se desmoronó en 1998 al cesar todo contacto entre el gobierno y UNITA, (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola). Los enfrentamientos aislados se intensificaron hasta convertirse en fuertes combates en diciembre, cuando la aviación gubernamental atacó los bastiones de UNITA en las tierras altas del centro del país. UNITA, que ha adquirido nuevas armas, rodeó y bombardeó las ciudades de Malange y Kuito, y también se libraron combates en otras zonas. El personal de la ONU ha recibido amenazas y, a finales de diciembre y principios de enero, dos aviones de la ONU fueron abatidos cerca de Huambo; en el incidente murieron 23 personas.

Los informes sobre abusos contra los derechos humanos en Angola aumentaron a medida que se deterioraba la situación de seguridad en 1998. En las ciudades, el derecho a la libertad de expresión y de asociación se fue restringiendo cada vez más al recibir periodistas y otras personas amenazas de muerte. En las zonas rurales, donde UNITA trataba de mantener o de obtener el control del territorio, las tropas gubernamentales y la policía paramilitar detuvieron, golpearon y mataron a personas sospechosas de respaldar a UNITA.

UNITA ha matado a funcionarios del gobierno, líderes tradicionales y civiles corrientes. Desde que la guerra se reanudó, a principios de diciembre de 1998, veintenas de personas han perdido la vida en bombardeos indiscriminados y muchas más de 200.000 han huido aterrorizadas de sus hogares, algunas de ellas por segunda o tercera vez.

Amnistía Internacional ha criticado la operación de mantenimiento de la paz en Angola de 1991 por su enfoque insuficiente en relación con los derechos humanos. Los homicidios sin freno por motivos políticos debilitaron los intentos de crear confianza y alcanzar la reconciliación. La reanudación de la guerra a finales de 1992 supuso el inicio de un periodo de graves abusos contra los derechos humanos que la ONU no pudo controlar ni documentar.

Sin embargo, durante los periodos de paz, especialmente durante la implantación del protocolo de Lusaka de 1994, la sociedad civil angolana comenzó a reanimarse y a reclamar derechos humanos. La presencia en Angola de los trabajadores de derechos humanos de la ONU ha hecho una importante contribución tanto a la protección como a la promoción de estos derechos en el país. Su trabajo ha incluido recabar información sobre los derechos humanos, contribuir a desarrollar la capacidad de las organizaciones locales no gubernamentales para trabajar en pro de la promoción y protección de estos derechos y prestar ayuda para reforzar los sistemas de justicia en cooperación con el gobierno angolano. Estos trabajadores deben continuar dicha labor en las zonas no afectadas directamente por el conflicto.